



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.**

#### **20-108**

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.  
Demandante: **GLORIA ELENA OROZCO ROJAS.**  
Demandado: **COLPENSIONES E.I.C.E.**  
Radicado No.: 05001-31-05-**015-2020-00752-01.**  
Tema: pensión de sobrevivientes.  
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN.**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora dentro del proceso de la referencia.

Conforme al memorial allegado, se reconoce personería jurídica a la doctora MANUELA ARREDONDO ROA identificada con C.C. No. 1.037.653.122 y portadora de la T.P. No. 332.571 del C.S de la J. para representar los intereses de COLPENSIONES E.I.C.E conforme sustitución de poder que le hiciera la apoderada de la firma RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S., VICTORIA ANGÉLICA FOLLECO ERASO, identificada con c.c. 1.085.256.525 y TP. 194.878 del C.S. de la J., con plenas facultades de acuerdo con las previsiones de los artículos 74 y 75 del C.G.P., debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá según consta en el Certificado de Existencia Representación Legal que acompañó, en su calidad de apoderada judicial de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES–, de acuerdo con la escritura pública N° 3.377 de 2 de septiembre de 2019 de la Notaría 9 del Círculo de Bogotá.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 032** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

Pretende la parte actora que tras declarar que a la señora GLORIA ELENA OROZCO ROJAS le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su cónyuge LUIS FERNANDO MONSALVE GÁRZON, se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar en favor de la actora el 100% de la mesada pensional desde la fecha de fallecimiento del causante. Que se condene a Colpensiones al pago de intereses moratorios y en subsidio la indexación de las condenas. Finalmente solicitó que se condene en costas y agencias en derecho.

### **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSIERON EN SÍNTESIS LOS HECHOS:**

- ✓ Que el señor LUIS FERNANDO MONSALVE GÁRZON contrajo matrimonio con la señora GLORIA ELENA OROZCO ROJAS el 15 de enero de 1981, con quien compartió techo, lecho y mesa hasta la fecha de deceso de aquel.
- ✓ Que el señor LUIS FERNANDO MONSALVE GÁRZON falleció el 7 de noviembre de 1987, data para la cual fungía como cotizante activo al fondo de pensiones del Instituto de Seguros Sociales y contaba con 464 semanas cotizadas entre diciembre de 1978 y noviembre de 1987.
- ✓ Que el 1 de marzo de 2019, la señora GLORIA ELENA OROZCO ROJAS solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.
- ✓ Que Colpensiones mediante resolución SUB 107451 del 6 de mayo de 2019 negó el reconocimiento argumentando que el vínculo matrimonial feneció el 25 de febrero de 1986, esto es, con anterioridad la fecha de fallecimiento del causante.
- ✓ Que mediante Escritura Pública 298 del 25 de febrero de 1986, el señor LUIS FERNANDO MONSALVE GÁRZON y la señora GLORIA ELENA OROZCO ROJAS decidieron disolver y liquidar la sociedad conyugal, no obstante, el vínculo matrimonial quedó incólume y la comunidad de vida entre la pareja se mantuvo hasta el día de fallecimiento del causante.
- ✓ Que Colpensiones se basó en el anterior hecho para concluir en fenecimiento del vínculo matrimonial, sin que se perciba en el registro civil de matrimonio alguna anotación o nota marginal que así lo indique.
- ✓ Que conforme a diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, el acto de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no debe entenderse como una disolución al vínculo matrimonial.

### **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Controvirtió Colpensiones el derecho pretendido. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la fecha de fallecimiento del causante, la solicitud de reconocimiento pensional incoada y su respuesta.

Frente a los demás, manifestó que la parte actora deberá probar sus afirmaciones en base al artículo 167 del C.G.P.

#### **1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia proferida el 13 de agosto de 2020, dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR que la señora GLORIA ELENA OROZCO ROJAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.433.479, no es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes solicitada con ocasión de la muerte del señor LUIS FERNANDO MONSALVE GARZÓN, quien en vida se identificaba con la c.c. 15.425.596.

SEGUNDO: ABSOLVER a COLPENSIONES, representada legalmente por la doctora Juan Miguel Villa Lora, o por quien haga sus veces, de reconocer y pagar a la señora GLORIA ELENA OROZCO ROJAS la pensión de sobrevivientes deprecada, así como todas las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: Las excepciones propuestas por COLPENSIONES al replicar la demanda quedan implícitamente resueltas con lo determinado.

CUARTO: En caso de no ser apelada esta providencia, se ordena el envío del proceso al H. TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA DE DECISIÓN LABORAL, en grado jurisdiccional de consulta, debido a que la sentencia ha sido adversa en su totalidad a las pretensiones de la demanda.

QUINTO: Las costas serán asumidas por la parte demandante vencida totalmente en juicio, para lo cual se fijan las agencias en derecho a favor de COLPENSIONES en la suma de en un salario mínimo legal mensual para el año 2020 equivale a \$877.803

Lo resuelto se notifica en ESTRADOS.”

Dentro del término establecido por la Ley, la parte demandante interpuso y sustentó recurso de apelación.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. ARGUMENTOS DE LA JUEZ.**

Resaltó la a quo que la norma que gobierna la prestación solicitada es el Decreto 3041 de 1966, modificado por el Decreto 232 de 1984, el cual exige 150 semanas de cotización, dentro de los 6 años

anteriores al fallecimiento, o 300 semanas en cualquier tiempo. Frente a este punto, determinó que no es posible cuantificar las semanas de cotización exigidas pues la resolución emitida por Colpensiones no es el mecanismo idóneo para cuantificarlas, aunado a que ninguna de las partes aportó la historia laboral del causante.

De otro lado, destacó que la señora GLORIA ELENA OROZCO ROJAS no acredita la calidad de cónyuge supérstite al momento del fallecimiento del causante, pues, en primer lugar, de la prueba documental se avizora que el registro civil de matrimonio contiene la nota *“disuelta y liquidada la sociedad conyugal por Escritura Pública 298 del 5 de febrero de 1986”*, situación que si bien no significa la disolución del vínculo matrimonial, no logra demostrar que la actora hubiese vivido con el causante hasta el momento de su fallecimiento; en segundo término, de las pruebas atendidas en el proceso, concluyó que tanto el interrogatorio de parte, como el testimonio rendido, no fueron suficientes para acreditar una convivencia efectiva al momento de la muerte, pues la testigo afirmó que nunca visitó el hogar de la accionante, y que solo veía a la actora cuando iba merca ya que vivía en una vereda cercana, de modo que, las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se efectuó la convivencia, no pudieron ser determinadas con claridad.

Reprochó el tiempo en que se tardó la accionante en reclamar la prestación, denotando a su juicio, que no avizoraba la dependencia económica propia de una convivencia, aunado que, aunque obra registro civil de matrimonio, este es un mero vínculo formal del cual no puede acreditarse un vínculo de auxilio mutuo, apoyo y vida común hasta el momento del fallecimiento.

## **2.1. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDANTE.**

Solicitó se revoque de forma total la providencia, considerando que el Decreto 3041 de 1966 habla de la cónyuge supérstite como beneficiaria de la prestación, sin establecer ningún tipo de condicionamiento adicional, tanto en la necesidad de acreditar algún tiempo de convivencia, como en la vigencia de la sociedad conyugal. En segundo lugar, adujo que la disolución de la sociedad conyugal no disuelve el vínculo matrimonial, pues lo que se termina es el régimen de bienes. En tercer lugar, destacó que la permanencia de la sociedad conyugal no es una condición para determinar la procedencia de la pensión, a diferencia de la permanencia del vínculo matrimonial, pues es un beneficio al compañero que prestó su ayuda en la construcción del derecho pensional y no tiene relación con la vigencia del régimen de bienes del matrimonio. Resaltó que el Decreto 3041 de 1966, privilegia la calidad de cónyuge, y no establece un condicionamiento adicional en cuanto al tiempo de convivencia o a la vigencia de la sociedad conyugal.

Indicó que conforme a recientes pronunciamientos jurisprudenciales, cuando el causante tiene la calidad de afiliado la cónyuge supérstite no tiene que acreditar un tiempo de convivencia, a diferencia de lo que sucede cuando se tiene la calidad de pensionado.

Solicitó se de aplicación a la sentencia SL 1681, en la que se establece que los intereses moratorios se aplican a todas las pensiones reconocidas con posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones.

Respecto a las semanas de cotización, indico que no se puede desconocer lo indicado en la resolución de Colpensiones, pues de algún modo establece que el causante realizó esos aportes, lo cual debe servir para determinar las semanas cotizadas.

Finalmente, indicó que el tiempo en que se tardó la actora para reclamar la forestación no afecta en nada la veracidad de las afirmaciones, pues aquella no tenía conocimiento de que podía llegar a ser beneficiaria de la prestación por sobrevivencia.

## **2.2. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.**

### **2.2.1 PRESENTADOS POR COLPENSIONES.**

Consideró que, la demandante no estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte, pues mediante Escritura Pública 298 del 25 de febrero de 1986, este y la demandante disolvieron y liquidaron su sociedad conyugal, resaltó que si bien la demandante afirma haber mantenido la convivencia con el causante, durante el proceso y con los medios probatorios realizados en primera instancia dicho hecho no fue probado, por lo que en segunda instancia debe ser resuelta dándole valor a lo afirmado en el registro civil de nacimiento y matrimonio de la accionante, y no a lo manifestado 20 años después.

Resaltó que no es procedente el reconocimiento de los intereses moratorios por cuanto no se acreditó el requisito de convivencia en el trámite administrativo, fundando la negación del derecho en la aplicación minuciosa de la Ley. En caso de emitir condena por este concepto, solicitó que fije su liquidación desde el tercer mes siguiente a la reclamación administrativa, conforme a las sentencias s sentencias T 588 de 2003, C 1024 de 2004 y SU 065 de 2018.

### **2.2.2 PRESENTADOS POR LA PARTE DEMANDANTE.**

Solicitó se revoque de forma total la providencia, considerando en primer lugar que, el Acto Administrativo SUB 107451 del 6 de mayo de 2019, suple la ausencia de la historia laboral del causante, pues determina de forma clara la densidad de semanas cotizadas pro aquel.

En segundo término, indicó que la nota marginal que obra en el registro civil de matrimonio que da cuenta de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, no es suficiente para desconocerla como cónyuge supérstite del señor LUIS FERNANDO MONSALVE, pues este acto no anula la vigencia del vínculo matrimonial.

En base a lo anterior, destacó que el artículo 21 del decreto 3041 de 1966 establece la calidad de beneficiaria de la cónyuge, sin hacer mención alguna a la sociedad conyugal y menos a si ésta debía encontrarse vigente o no, resaltando que, en primera instancia se exigieron requisitos extralegales bajo criterios e interpretaciones particulares y se impusieron exigencias adicionales para poder acceder a la prestación económica deprecada en la demanda.

Finalmente, solicitó se reconozcan los intereses moratorios conforme a lo indicado por la C.S.J. en providencia SL 1681 de 2020, la cual expone que este concepto debe aplicarse a todas las pensiones y no solo a las reconocidas con base en el Ley 100 de 1993, toda vez que el artículo 53 de la Constitución Política, obliga al Estado y a las entidades de previsión social a garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

A juicio de esta Magistratura, el problema jurídico se circunscribe en determinar si la demandante cumple con los requisitos para causar la prestación económica de sobrevivencia, con ocasión del fallecimiento del señor LUIS FERNANDO MONSALVE GÁRZON, lo anterior, conforme a lo estatuido por el Decreto 3041 de 1966.

### **4. CONSIDERACIONES.**

En primer lugar, debe indicarse que respecto de la normatividad con la cual debe dirimirse el derecho a la pensión de sobrevivientes, la jurisprudencia tiene establecido de forma pacífica que debe ser la vigente a la fecha del deceso del causante, así lo ha indicado en múltiples pronunciamientos, entre ellos en el de radicado 24421 de 2005 40438 de 2012, 52578 de 2016 62832, 71139 de 2019, entre otras.

Por tanto, como el señor LUIS FERNANDO MONSALVE GÁRZON, falleció el 7 de noviembre de 1987 (fl 24 archivo 01 expediente digital) la norma que gobierna la prestación es el Decreto 3041 de 1966 con la modificación del Acuerdo 019 de 1983 aprobado por el Decreto 232 de 1984 que disponía:

**ARTICULO 20.** Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a pensiones de sobrevivientes en los siguientes casos:

- a. Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen, según el artículo 5o para el derecho a pensión de invalidez;
- b. Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez o de vejez según el presente reglamento.

A su vez el artículo 5º de la norma en comento establecía:

**ARTICULO 5o.** Tendrán derecho a la pensión de invalidez los asegurados que reúnan las siguientes condiciones:

(....)

- b. Tener acreditadas 150 semanas de cotización para los riesgos de invalidez, vejez y muerte dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época.

Ahora bien, el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966, establece como beneficiarios de dicha prestación:

“La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento (50%) y la de cada huérfano con derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de la que le habría correspondido a la fecha del fallecimiento, excluidos los aumentos dispuestos en el artículo 16 del presente reglamento. Cuando se trate de huérfanos de padre y madre, la cuantía de la pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30%) para cada uno.”

En este orden de ideas, es pertinente recordar que la prestación por sobrevivencia tiene como objetivo principal proteger la institución de la familia como una comunidad de vida que se extiende al núcleo familiar del causante, erigiéndose como un mecanismo preservador que busca contrarrestar el desamparo que la muerte del pensionado o del afiliado pudiere generar en los beneficiarios que determina la Ley, al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación 149 de 2021, define tal precepto así:

“Como se dijo en párrafos anteriores en esta providencia, la pensión de sobrevivientes propiamente dicha y la sustitución pensional, se instituyen para cubrir las contingencias derivadas de la muerte y respecto de los familiares del afiliado o pensionado fallecido que dependían económicamente de este. Ambas tienen fundamento en los principios de solidaridad (por el cual se brinda estabilidad económica y social a los allegados al causante) y de reciprocidad (pues de esta manera se reconoce en favor de ciertas personas una prestación derivada de la relación afectiva, personal y de apoyo que mantuvieron con el causante). La Sala destaca que estas prestaciones pretenden suplir el apoyo económico que el pensionado o afiliado fallecidos brindaban a su grupo familiar y, de este modo, evitar que la muerte del causante repercuta en el desamparo, la desprotección o la afectación de la subsistencia mínima de sus beneficiarios. Es necesario recalcar, entonces, que el propósito de la pensión de sobrevivientes, que es la protección del grupo familiar del causante, es predicable de los pensionados y afiliados, sin distinción.”

En similar sentido, la Corte Suprema de Justicia, en providencia SL 2085 de 2023 determinó la finalidad de esta prestación económica bajo el siguiente argumento:

“La pensión de sobrevivientes tiene como finalidad proteger al grupo familiar que depende económicamente del causante de los perjuicios económicos que puedan llegar a ocurrir con su fallecimiento y, con ello, evitar que las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios del causante se vean afectadas.

Así, para que el beneficiario se haga acreedor del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del causante, debe cumplir con todos los requisitos que consagra la disposición vigente al momento del deceso, sin que ninguno de estos sea susceptible de no demostrarse o pretender que alguno de ellos tenga mayor valor a la hora de conceder el disfrute del mismo.

En tal perspectiva, en tratándose de cónyuges o compañeros(as) permanentes, la convivencia constituye un elemento fundamental para el acceso al derecho pensional, por cuanto el citado concepto permite establecer la existencia de una comunidad de vida estable, donde los involucrados crean relaciones de afecto, respeto y ayuda mutua (CSJ SL476-2022, CSJ SL5677-2021 y CSJ SL1744-2021).”(subrayado fuera de texto).

En este orden de ideas, aunque es bien sabido que entre las Corporaciones citadas existe interpretación disímil respecto de algunos parámetros para suputar temporalmente la configuración de la convivencia, el factor interpretativo confluye en la exigencia de constitución de una convivencia real y efectiva que desemboque en la causación del derecho que aquí se pretende, pues de otro modo, se distorsionaría el objeto y la finalidad de la prestación, desligando a todas luces su causación, de los fines para los cuales fue instituida, esto es, la protección material y efectiva del núcleo familiar del causante que se ha visto inermes con ocasión al fallecimiento de aquel.



Bajo este entendido, alude la recurrente que para causar el derecho pensional solamente basta con la acreditación de un vínculo matrimonial vigente al momento del deceso, lo anterior conforme a la interpretación literal que realiza del artículo 21 del Decreto 3041 de 1966. Punto en el que difiere la Sala, pues si bien, para el caso de autos se avizora la existencia del registro civil de matrimonio (fl. 28 del archivo 01 del expediente digital), el concepto de familia no es un factor que pueda ser objeto de presunción, ya que los lazos jurídicos existentes no tienen la trascendencia suficiente para conjeturar la existencia de una comunidad de vida, o, en otras palabras, de una convivencia efectiva como requisito *sine qua non* de causación de la prestación por sobrevivencia. Es dable enmarcar, que este planteamiento ha sido determinado inclusive antes de la entrada en vigencia del Decreto 3041 de 1966, pues desde la expedición de la Ley 90 de 1946, se ha propendido por la protección de la familia bajo las condiciones constitutivas de la convivencia, y no solo bajo el cumplimiento de los requisitos formales y que en sentido exegético describe la norma, en sentido similar, lo analizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1060 de 2023 en la cual adujo:

“Como puede verse y destacarse, la aludida ley vino a convertirse, desde mediados del siglo pasado, en la impulsora de la ampliación del concepto de familia, y de los derechos que de la misma derivan, independientemente de los lazos jurídicos existentes, dando prelación a lo que estimó importante, esto es a la comprobación de una comunidad de vida -convivencia-, y a la necesidad de prodigar el amparo a los seres queridos ante la desaparición física del trabajador. De hecho, es tan avanzada para su época la citada disposición, que también, previó el acontecimiento u ocurrencia de la denominada «convivencia simultánea», en la medida que preceptuó que, si dentro de los tres años anteriores al deceso el asegurado convivió con múltiples compañeras, tenían derecho proporcional con las que hubiese tenido hijos.”

Ahora bien, descendiendo al *sub lite*, la señora CARMEN OFELIA FRANCO en el único testimonio evacuado, si bien es cierto afirmó que la relación duro 6 años y culminó con el fallecimiento del causante, también lo es que indicó: *que nunca visitó a la pareja, que iba a mercar los miércoles y sábados, únicos días en que miraba a la actora y se tomaba un café, que no se enteró de la muerte del causante sino hasta tiempo después y que nunca le preguntaba nada a la actora sobre su vida íntima*, bajo este panorama, es posible aducir que el testimonio rendido no resulta fehaciente a la hora de constatar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se desarrolló la convivencia, pues la señora FRANCO ni siquiera conoció el lugar en el cual se desarrolló la vida en común, de lo que se concluye que la testigo no tuvo un conocimiento directo o de causa, que le hubiese permitido certificar hechos concretos, por el contrario, su experiencia se basa en los dimes y diretes sostenidos con la misma accionante cada vez que se encontraban en el lugar acordado. Aunado a lo anterior, destaca la Sala que, en el registro civil de matrimonio aportado al plenario se puede apreciar nota marginal del siguiente tenor: *“disuelta y liquidada la sociedad conyugal por escritura pública No 298 del 25 de febrero de 1986. Notaria única de Rionegro ant”*, si bien es claro que esta anotación no es

relevante para la adquisición del derecho, ya que no disuelve y tampoco incide de ninguna manera en la vigencia del vínculo matrimonial, a juicio de esta Magistratura, bajo los lineamientos del artículo 167 del C.G.P. en el caso concreto este supuesto conlleva a que la parte activa despliegue una actividad probatoria superior, pues el hecho de disolver uno de los vínculos que direcciona una vida en común aunado al exiguo e infundado material probatorio aportado al plenario, desemboca en la fragmentación del concepto que determina una convivencia material y efectiva.

Ahora bien, del interrogatorio de parte absuelto por la actora, se pudo colegir que reside en el exterior hace 20 años, que tiene 3 hijas, ninguna con el causante, que el señor MONSALVE GARZÓN falleció en Medellín y posteriormente fue trasladado a Rionegro, que no supo quién sufragó los gastos fúnebres, que solo hubo una separación no superior a un mes, en cuanto a la disolución de la sociedad conyugal, resaltó que *se dio con base a la magnitud de sueños o propósitos que tenía el causante, pues el tipo de vida que quería llevar era muy alto con relación a lo que realmente tenía*, finalmente corroboró que la convivencia se desarrolló en el municipio de Rionegro, cerca del parque principal, y duró hasta el momento de la muerte. En este orden de ideas, si bien la accionante confirma los argumentos plasmados en el escrito demandatorio, a juicio de la Sala, estos no tienen un cimientito con conocimiento de causa que los acredite, pues como se mencionó en el inciso que antecede, y teniendo en cuenta la carga probatoria que le asiste conforme al artículo 167 del C.G.P., la accionante tenía la obligación de corroborar sus dichos con otros instrumentos probatorios, como los son pruebas documentales o testimoniales que den cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló la convivencia, situación que no acaeció.

Corolario de lo anterior, para la Sala es claro que en el presente asunto no se lograron establecer los parámetros necesarios para declarar la existencia de convivencia, entendida esta como una comunidad de vida fundada en lazos afectivos, sentimentales, de apoyo, solidaridad, ayuda mutua y acompañamiento espiritual entre los señores GLORIA ELENA OROZCO ROJAS y FERNANDO MONSALVE GÁRZON, si bien existe un vínculo matrimonial válido, este formalismo no puede franquear la barrea del derecho sustancial, pues este último determina el derecho subjetivo de la persona y justifica la procedencia, causación y reconocimiento de la prestación por sobrevivencia, de tal manera que, el derecho sustancial no puede verse disminuido, distorsionado, ni alterado en su génesis por una interpretación exegética de la normatividad aplicable, pues de permitirse, se estaría transgrediendo de forma directa los principios de legalidad, confianza legítima y sostenibilidad financiera del sistema pensional. En este orden de ideas, esta Magistratura concluye que no le asiste razón a la recurrente, ya que como se probó, el exiguo despliegue probatorio efectuado por la actora no permite revestir de certeza los supuestos que configuran una convivencia material y efectiva, como requisito esencial de causación de la pensión de sobrevivientes de acuerdo a los parámetros del Decreto 3041 de 1966.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia será **CONFIRMADA** de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Se condenará en costas en esta instancia a la parte demandante, a favor de Colpensiones E.I.C.E. por no haber tenido éxito en la apelación. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$ 580.000.

## 5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

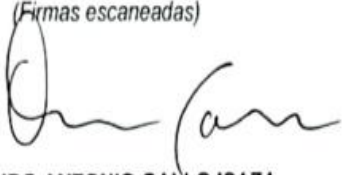
Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE:**


**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida el 13 de agosto de 2020 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora GLORIA ELENA OROZCO ROJAS identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 39.433.479 contra **COLPENSIONES E.I.C.E.**


**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fija como agencias en derecho la suma de \$ 580.000 a favor de COLPENSIONES E.I.C.E.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

  
MARIA NANCY GARCIA GARCIA

  
MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante:	<b>GLORIA ELENA OROZCO ROJAS.</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES E.I.C.E.</b>
Radicado No.:	<b>05001-31-05-015-2020-00752-01.</b>
Tema:	<b>pensión de sobrevivientes.</b>
Decisión:	<b>CONFIRMA ABSOLUCIÓN.</b>
Fecha de la sentencia:	<b>27/09/2023</b>

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 28/09/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario